

MEMORIA EJECUTIVA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 7/2005, DE 23 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS QUE LLEVA POR RÚBRICA “AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID” Y DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LA MISMA LEY

ANEXO: FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO

Consejería/Órgano proponente	Consejería de Administración Local y Digitalización Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid	Fecha inicial: DICIEMBRE 2021
Título de la norma	Modificación del artículo 10 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas que lleva por rúbrica “Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid”	
Tipo de Memoria	Ejecutiva	
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA		
Situación que se regula	Concurren razones de interés general que hacen necesaria la adaptación de la Ley reguladora de la Agencia a los tiempos actuales. Nos encontramos ante un sector de actuación tremendamente cambiante y sujeto a constantes innovaciones tecnológicas. Téngase en cuenta que, a fecha de aprobación de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, conceptos y fenómenos como la denominada transformación digital de la Administración, el análisis de datos, la inteligencia de datos, la generación y gestión de conocimiento o el «big data», en otros, eran totalmente desconocidos, por lo que el paso del tiempo ha provocado la creación de lagunas que han colmarse con la nueva normativa.	

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1037865286394805931469



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el código de verificación: 10378652632480591469

Objetivos que se persiguen	<p>Se persigue una definición del objeto social y de las funciones de la Agencia, atendiendo a la evolución que la anteriormente denominada “informática” ha padecido hasta el momento actual, adaptando, además, la terminología a la realidad y la actualización de las leyes que han perdido su vigencia mencionadas en el artículo 10.Cuatro, así como modificar la composición del consejo de administración para que el titular de la consejería de adscripción de la Agencia ocupe el puesto de Vicepresidente y no el titular de la Secretaria General Técnica, además de incorporar como vocales al titular de la dirección general con competencias en materia de política digital, y al titular de la dirección general con competencias en sistemas de información y equipamientos sanitarios. Se adiciona un apartado quince al artículo para dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 33.5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.</p>
Principales alternativas consideradas	<p>Por imperativo de la Ley 1/84, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, cuyo artículo 70 prevé que “En lo no dispuesto en la presente Ley los entes a que se refiere este capítulo – entre los que se encuentran las entidades de derecho público como la Agencia- se regularán por lo señalado en su Ley de creación.” Por ello, no se ha previsto la regulación del régimen competencial y jurídico de la Agencia por Decreto de Gobierno. Dada la trascendencia transversal de las tareas de la Agencia, más en el momento actual y la necesidad de que las mismas solo puedan modificarse mediante ley con el fin de que pueda respetarse los proyectos estratégicos de transformación de la Administración se considera necesario mantener el rango normativo de la norma.</p>
CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO	
Tipo de norma	<p>Ley</p>
Estructura de la Norma	<p>Se trata de modificar el artículo 10, en sus apartados Uno.1; Tres; Cuatro.4 y 6; y Seis.1; así como incorporar el apartado 10.Quince de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas que lleva por rúbrica “Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid”.</p>

Informes recabados	<p>Deberá recabarse los siguientes informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de coordinación y calidad normativa. - Dirección General de Igualdad. - Dirección General de Infancia, Familias y Fomento de la Natalidad. - Dirección General de Transparencia y Atención al ciudadano como Dirección competente en administración electrónica. - Secretarías Generales Técnicas de las distintas consejerías. - Informe de la Abogacía General. - Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.
Trámite de audiencia/Información Pública	<p>Procede, de conformidad con el artículo 26, apartado 6, de la Ley de Gobierno y publicación en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid.</p>

ANÁLISIS DE IMPACTOS

ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS

Los artículos 68 y 70 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, de Administración Institucional de la Comunidad de Madrid requieren que los entes de derecho público como la Agencia se creen y regulen mediante Ley de la Asamblea.

Todas las competencias atribuidas a la Agencia dimanar del tenor actual de la Ley, si bien ampliándolo a nuevas tecnologías surgidas a lo largo de estos años.

Se hace especial hincapié en las políticas de seguridad de la información de los sistemas de información de titularidad de la Agencia y el asesoramiento de la Agencia en normas de carácter técnico relacionadas con su ámbito competencial.

IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO

Efectos sobre la economía
en general

Las funciones atribuidas a la Agencia tienen un alto impacto en la economía, pues muchas de ellas tienen por objeto implementar la Administración electrónica, es decir, la relación del ciudadano con la Administración. Igualmente impacta la transformación y digitalización de la Administración de cara a la prestación de servicios digitales al ciudadano.

En relación con la
competencia

El proyecto no es susceptible de introducir elementos que distorsionen la competencia en el mercado.

Desde el punto de vista de
las cargas administrativas

No se prevén cargas administrativas para los ciudadanos y ciudadanas para cumplir con las obligaciones derivadas de la norma.

Desde el punto de vista de
los presupuestos de la
Comunidad de Madrid

No tiene impacto presupuestario.

IMPACTO DE GÉNERO

La norma tiene un impacto
de género

No se identifican.

IMPACTO DE EN MATERIA DE FAMILIA	La norma tiene un impacto de familia, infancia y adolescencia	No se identifican.
IMPACTO EN LA UNIDAD DE MERCADO	La norma tiene un impacto en la unidad de mercado	No se identifican.
OTROS IMPACTOS	No se identifican.	

MEMORIA EJECUTIVA

1.- Oportunidad de la norma.

1.1. Identificación de los fines

La transformación digital que el mundo está viviendo, acelerada por la pandemia COVID 19, ha impactado de lleno en la sociedad, en su economía, negocios y en la forma en que se relacionan los ciudadanos con la Administración.

Las nuevas tecnologías están dinamitando las exigencias de los ciudadanos para con sus Administraciones, requiriendo servicios más eficientes y esencialmente digitales que requieren de un proyecto transversal para su diseño e implementación en toda la Comunidad de Madrid.

La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid tiene por finalidad primordial la planificación y ejecución de ese plan para el Sector Público de la Comunidad de Madrid, mediante el desarrollo de proyectos y la prestación de los servicios relacionados con las tecnologías de la información, las redes de comunicaciones electrónicas y la ciberseguridad de sus sistemas de información.

Con la finalidad de garantizar la transformación digital de la Administración regional y encontrándonos ante un sector de actuación tremendamente cambiante y sujeto a constantes innovaciones tecnológicas, se requiere un marco regulatorio que dote a la Agencia de las funciones necesarias para afrontar las necesidades surgidas de las nuevas tecnologías de forma eficiente, transversal y con una finalidad de universalizar

la digitalización de los proyectos y servicios que presta la Administración a los ciudadanos y a sí misma, respetando los principios legales en materia de ciberseguridad y seguridad de la información y asignando a la Agencia el papel de encargado del tratamiento de datos personales.

Téngase en cuenta que, a fecha de aprobación de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, conceptos y fenómenos como la denominada transformación digital de la Administración, el análisis de datos, la inteligencia de datos, la generación y gestión de conocimiento o el «big data», en otros, eran totalmente desconocidos, por lo que el paso del tiempo ha provocado la creación de lagunas que han colmarse con la nueva normativa.

Verdadera relevancia ha cobrado la gestión e implementación de nuevos productos y desarrollos software, bases de datos y dispositivos de todo tipo empleados a día de hoy en la tramitación normal de los procedimientos administrativos.

Debe destacarse especialmente la necesidad de regular los servicios en la nube, que están teniendo una incidencia decisiva a la hora de preservar la agilidad y seguridad de procesos de los distintos Entes a los que Madrid Digital presta servicios.

En consecuencia, concurren razones de interés público para actualizar y definir con claridad las competencias encomendadas a la Agencia.

1.2. Adecuación a principios de buena regulación

En el contenido y tramitación de esta Ley, se han observado los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.

Su adecuación a los principios de necesidad y eficacia viene justificada por razones de interés general consistentes en impulsar y asegurar la transformación digital de la Administración regional. Nos encontramos ante un escenario tecnológico especialmente dinámico y en constante innovación tecnológica, que requiere un marco regulatorio que dote a la Agencia de las funciones necesarias para afrontar los retos que depara la



efectiva implantación y buen funcionamiento de la Administración Electrónica, elevada por el legislador a rango de derecho del ciudadano en sus relaciones con el Sector Público.

De la misma manera, este decreto se adecúa al principio de proporcionalidad, ya que contiene la regulación imprescindible y necesaria para atender la necesidad a cubrir por la misma y poder garantizar el buen funcionamiento de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, plasmando la regulación en una norma que será objeto de publicación.

Así mismo, la presente Ley se dicta en coherencia con el resto del ordenamiento jurídico de la Comunidad de Madrid, nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo estable y claro que facilita su conocimiento y comprensión.

De otra parte, su tramitación se ha ajustado al procedimiento previsto en el Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

En cuanto al principio de transparencia, al tratarse de una norma de carácter organizativo, está exenta de los distintos trámites propios de la participación pública, esto es, consulta pública y trámites de audiencia e información públicas. No obstante, en su elaboración se ha contado con la participación de los Centros Directivos afectados y de las Secretarías Generales Técnicas de las distintas consejerías.

Durante la tramitación de la norma, los informes evacuados que publican en el Portal de Transparencia de la Comunidad y, una vez aprobada, se podrá consultar en la base de legislación de la Comunidad de Madrid contenida en dicho Portal.

La no aprobación de la Ley supondría un desfase entre el nuevo diseño de relaciones administrativas entre la Comunidad de Madrid y los ciudadanos y una posible conculcación de los derechos de estos últimos.

2.- Identificación del título competencial prevalente.

Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en su artículo 26.1.1 atribuye a la Comunidad de Madrid, competencia exclusiva en la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, correspondiendo a ésta la potestad legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva que se ejercerán respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Constitución Española.



Entro otras muchas, el Pleno del Tribunal Constitucional en su Sentencia 50/1999 de 6 Abril de 1999, Rec. 521/1993 en relación con la competencia exclusiva en la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno de las Comunidades Autónomas advirtió que esta competencia (STC 227/1988, FJ 24) en tanto que competencia exclusiva tiene como único contenido la potestad para crear, modificar y suprimir los órganos, unidades administrativas o entidades que configuran las respectivas Administraciones autonómicas o dependen de ellas (TC SS 35/1982, 165/1986, 13/1988 y 227/1988). Hemos declarado que «conformar libremente la estructura orgánica de su aparato administrativo» (TC S 165/1986, FJ 6.º), establecer cuáles son «los órganos e instituciones» que configuran las respectivas Administraciones (TC S 35/1982, FJ 2.º), son decisiones que corresponden únicamente a las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, el Estado debe abstenerse de cualquier intervención en este ámbito (TC S 227/1988 y a sensu contrario TC S 13/1988).

Adicionalmente, los artículos 68 y 70 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, de Administración Institucional de la Comunidad de Madrid requieren que los entes de derecho público como la Agencia se creen y regulen mediante Ley de la Asamblea.

La composición de medios humanos y materiales que tradicionalmente tiene asumida la Agencia le confiere un conocimiento y experiencia específicos en materia de dotación de medios electrónicos y de comunicaciones. Ello implica que sea la Agencia la Entidad idónea para asumir la dirección, planificación, impulso, desarrollo y ejecución de la política tecnológica, de comunicación electrónica y de seguridad de la información de la Administración de la Comunidad de Madrid, garantizando la interoperabilidad, escalabilidad, compatibilidad, suministro e intercambio de información.

3.- Listado de las normas que quedan derogadas.

Se modifica el artículo 10. Uno.1, 10. Tres, 10. Cuatro.4 y 6, y 10. Seis.1, así como incorporar el apartado 10.Quince de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas que lleva por rúbrica “Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid”.

5.- Impacto presupuestario en la Comunidad de Madrid.



No se identifican impactos adicionales al presupuesto de la Comunidad de Madrid, toda vez que, aunque se amplíen las funciones de la Agencia, éstas no llevan aparejado incremento de costes ya que las nuevas tecnologías conllevan que se dejen de emplear las antiguas o su migración a sistemas y aplicaciones más eficientes, sin perjuicio del carácter estimativo del presupuesto de la Agencia.

Por otro lado, aunque se amplía el ámbito subjetivo de actuación de la Agencia a toda la Administración Institucional con excepción de las sociedades mercantiles autonómicas, la Agencia ya venía prestando sus servicios en cuanto a sistemas de información corporativos, institucionales y de uso uniforme en la Comunidad de Madrid.

En cuanto a las Administraciones locales, el proyecto normativo no altera ninguna de las funciones que la Agencia ya tenían respecto de las Entidades locales con el texto de la Ley que se pretende modificar, sin perjuicio de que tales funciones no afectaban a sus presupuestos.

Por tanto, la aprobación de la modificación de la Ley no tiene impacto presupuestario.

6.- Impacto por razón de género, así como otros impactos detectados que se juzguen relevantes.

No se identifican en la norma propuesta efectos, directos o indirectos, sobre las personas físicas, toda vez que la norma tiene por objeto regular el régimen de actuación de la Agencia que, de conformidad con su ámbito de actuación subjetiva, presta exclusivamente sus servicios a la Administraciones General e Institucional de la Comunidad de Madrid.

Se señala que, a los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, el presente texto normativo no afecta a la familia, la adolescencia y la infancia, ya que se trata de ordenar las competencias y funcionamiento de la Agencia en el ámbito de los proyectos y servicios relacionados con tecnologías de la información, comunicaciones electrónicas y ciberseguridad. Por la misma razón, no se prevé impacto alguno por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.

Como consecuencia de ello, no se aprecia impacto por razón de género.



7.- Descripción de la tramitación y consultas realizadas.

De conformidad con el Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid se considera que el proyecto requiere:

- ✓ Informe de impacto por razón de género, a confeccionar por la Dirección General de Igualdad, en aplicación del artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.
- ✓ Informe de impacto de la norma en la familia, la infancia y la adolescencia, a confeccionar por la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, exigido por el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y por la Disposición Adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de las Familias Numerosas.
- ✓ Informe de impacto en materia de orientación sexual, identidad o expresión de género, a confeccionar por la Dirección General de Igualdad, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y el artículo 21 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.
- ✓ Informe de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, a que se refiere el artículo 12 apartado c) del Decreto 52/2021, de 24 de marzo..
- ✓ Trámite de audiencia e información pública, de conformidad con el artículo 26, apartado 6, de la Ley del Gobierno y publicación en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid.
- ✓ Remisión por la Secretaría General Técnica de la Consejería proponente a todas y cada una de las Consejerías.



- ✓ Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, en aplicación de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

8.- Motivos que justifican su elaboración ejecutiva.

Del proyecto propuesto no se identifican impactos significativos presupuestarios, de género, de la competencia ni cualquier otro impacto significativo sino que se trata de una actualización del régimen de actuación de la Agencia atendiendo a la evolución del estado de la técnica desde la anterior norma, considerando el tiempo transcurrido y el profundo impacto que la pandemia ha generado en la necesidad de transformar la Administración para prestar un servicio digital a los ciudadanos que sólo puede partir de su propia transformación.

9.- Observaciones formuladas al artículo 28 del Anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid.

1.- Observaciones formuladas por la Dirección General de Sistemas de Información y Equipamientos Sanitarios.

Las citadas observaciones consideran que la propuesta de modificación del artículo 10 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas contenida en el artículo 28 del Anteproyecto ha de respetar el contenido de la disposición adicional de la Ley 7/2005 que contiene un régimen jurídico especial en sus apartados 4 y 5 en relación con las competencias de la Agencia para la Administración Digital respecto del ámbito sanitario.

Obsérvese que la propuesta contenida en el anteproyecto no conlleva ninguna modificación de la citada disposición, por lo que la misma permanece en vigor en sus propios términos.

Respecto de la modificación de la disposición adicional solicitada por la Dirección General de los apartados 4 y 5.c) y d) realizamos las siguientes consideraciones:

- El trámite de consulta tiene por objeto exclusivo pronunciarse sobre la propuesta normativa sometida a consulta pero no introducir modificaciones de preceptos o artículos de la norma que no han sido sometidos a consulta, pues, en tal caso



habría que volver a someterlo a trámite de consulta, por lo que procedería el rechazo de la modificación propuesta.

- La Dirección General de Sistemas de Información y Equipamientos Sanitarios, propone que el apartado 4 de la disposición adicional incorpore nuevas materias sobre las que Madrid Digital no extienda sus competencias, en concreto, inteligencia artificial, *big data* y políticas de seguridad de los sistemas sanitarios.
- En relación con las dos primeras, Madrid Digital rechaza la conveniencia de la inclusión solicitada, al considerar que se ha de tener una estrategia común respecto de la incorporación de estas nuevas tecnologías a los sistemas de información y comunicación electrónica que busque la escalabilidad, interoperabilidad y conectividad en todos los sistemas y redes de la Comunidad de Madrid.
- Adicionalmente en relación con las políticas de seguridad de los sistemas sanitarios, actualmente, ya se ha aprobado la Orden 491/2013, de 27 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la Administración Electrónica y de los sistemas de información de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por lo que tal mención en la Ley de la Agencia se hace innecesario, sin perjuicio de que podría valorarse su conveniencia, toda vez que las redes de comunicación electrónica de voz y datos son competencia de Madrid Digital, así como el puesto ofimático básico, por lo que la existencia de estas políticas con roles diferentes a los existentes en el resto de la Comunidad de Madrid por medio de Madrid Digital podrían conllevar a desajustes e incompatibilidades que perjudicasen la seguridad de la información en la Comunidad de Madrid.
- En relación con los apartados 5.c) y d) de la citada disposición adicional consideramos innecesaria la propuesta que solo supondría un cambio formal en la redacción, sin relevancia material ni jurídica.

2.- Observaciones formuladas por la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

- Se observa por la Dirección General que el apartado 1 del artículo 1º no refiere la personalidad jurídica de la Agencia.



Se acepta la observación realizada, de tal modo que el apartado 1 pasa a decir:

“1. La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid se configura como ente público de los previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar y autonomía de gestión, tiene por objeto la definición, planificación y ejecución de proyectos y servicios relacionados con tecnologías de la información, comunicaciones electrónicas y ciberseguridad, garantizando la interoperabilidad, escalabilidad, compatibilidad, suministro e intercambio de información, en el ámbito de actuación definido en el apartado dos de este artículo.”

- Se observa por la Agencia que, por razones de seguridad jurídica, habría que concretar el apartado 2 del artículo 10 en cuanto a qué ha de entenderse por entes públicos; sin embargo el citado apartado no es objeto de modificación, por lo que no procede la observación realizada.

3.- Observaciones formuladas por de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

- Se plantea un posible conflicto con el Decreto regulador de la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, concretamente con la Dirección General de Economía en materia de Estadística. Se advierte que ya no se atribuyen competencias a la Agencia en exclusividad y, en relación con la competencia reconocida en el Apartado 10.Tres.2.d) del artículo 10 de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, relativa a la adquisición, el diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento, gestión y evolución de los sistemas de información, se propone atribuir a las Consejerías esas competencias en los supuestos en que Madrid Digital no pueda dar cumplimiento a las necesidades.

Se rechazan las dos opciones propuestas, ambas tendentes a atribuir a las Consejerías competencias que actualmente corresponden en exclusiva a Madrid Digital, por las siguientes razones:



1ª. La descentralización de competencias en los diferentes órganos de la Comunidad de Madrid generaría disfuncionalidades en relación a la interoperabilidad, seguridad y eficacia de las soluciones a los servicios públicos.

2ª. El correcto funcionamiento de servicios públicos autonómicos se asienta sobre infraestructuras críticas que debe gestionar un Ente especializado, con la experiencia y conocimiento necesarios para la correcta prestación de los servicios públicos. Es necesario un marco regulatorio que dote a la Agencia de las funciones necesarias para afrontar las necesidades surgidas de las nuevas tecnologías de forma eficiente, transversal y con una finalidad de universalizar la digitalización de los proyectos y servicios que presta la Administración a los ciudadanos y a sí misma, respetando los principios legales en materia de ciberseguridad y seguridad de la información y asignando a la Agencia el papel de encargado del tratamiento de datos personales.

3ª. No constituye adecuada técnica legislativa atribuir competencias de manera subsidiaria al conjunto de órganos de la Comunidad de Madrid para el supuesto de que la Entidad u Órgano que la tenga atribuida no pudiese ejercer sus competencias.

Por tanto, se rechaza la propuesta de modificación de este apartado, debiendo atribuirse a la Agencia las competencias con carácter exclusivo, tal y como consta en el texto actual de la Ley.

- Se acepta la propuesta de actualizar la denominación de la Agencia a la actual, Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
- Se propone matizar el apartado 4.4 del Anteproyecto de Ley, relativo al régimen jurídico aplicable a la Agencia en materia de contratación, señalando que es poder adjudicador que tiene el carácter de Administración Pública con base al art. 32.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Se admite la propuesta.
- En relación al apartado 4.6, se admite igualmente la matización en la distinción entre encomienda de gestión y medios propios para adaptar el texto de la Ley a la legislación vigente.



En Madrid, a fecha de firma.

LA CONSEJERA DELEGADA
DE LA AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Fdo. Elena Liria Fernández



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1037865286394805931469**

ANEXO

TEXTO QUE SE PROPONE

Artículo 10. Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

Uno. Naturaleza y personalidad jurídica

1. La Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid se configura como ente público de los previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar y autonomía de gestión, tiene por objeto la definición, planificación y ejecución de proyectos y servicios relacionados con tecnologías de la información, comunicaciones electrónicas y ciberseguridad, garantizando la interoperabilidad, escalabilidad, compatibilidad, suministro e intercambio de información, en el ámbito de actuación definido en el apartado dos de este artículo.

Tres. Competencias.

1. La Agencia, para el cumplimiento de sus objetivos, tiene las competencias que emanan de esta ley y de las demás leyes y reglamentos que resulten de aplicación.

2. La Agencia ejercerá en exclusiva las siguientes competencias:

a) La dirección, planificación, impulso, desarrollo y ejecución de planes y proyectos de tecnología, de comunicación electrónica y de seguridad de la información de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Madrid, garantizando la interoperabilidad, escalabilidad, compatibilidad, suministro e intercambio de información.

b) La participación en las propuestas e iniciativas sobre agilización y simplificación de procedimientos administrativos y servicios electrónicos, atención a la ciudadanía, gobierno abierto y transparencia que se realicen en la Administración General e Institucional de la Comunidad de Madrid, incluyéndose aquellas dirigidas a otras administraciones públicas, al sector público, universidades, empresas y sector privado en general, sin perjuicio de las competencias de la dirección general competente en materia de transparencia y gobierno abierto.



- c) El desarrollo y la ejecución de la estrategia diseñada por el órgano competente de la Comunidad de Madrid en materia de inteligencia artificial y otras tecnologías habilitadoras para la transformación digital de la administración, así como la coordinación, ejecución y seguimiento del desarrollo de estos proyectos en la Comunidad de Madrid, incluido el análisis, diseño, desarrollo, implantación tecnológica, mantenimiento y evolución de los sistemas y soluciones tecnológicas de análisis de datos, gobierno del dato, cuadros de mando, datos masivos o «big data», inteligencia de datos, generación y gestión de conocimiento.
- d) La adquisición, el diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento, gestión y evolución de la infraestructura tecnológica, sistemas de información y de comunicaciones electrónicas y seguridad de la información de titularidad de la Agencia, así como la ejecución de las actuaciones para su consolidación y racionalización, incluyéndose en particular el puesto de trabajo, las infraestructuras de almacenamiento, los centros de procesos de datos, incluido el uso de nubes públicas y privadas de la Comunidad de Madrid y el archivo electrónico único de los expedientes y documentos electrónicos.
- e) La gestión de los derechos de uso de productos software, bases de datos y en general cualesquiera elementos lógicos o físicos.
- f) El establecimiento de sistemas de información de uso obligatorio en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Madrid y consorcios adscritos.
- g) El soporte y atención directa al personal empleado sobre los elementos tecnológicos puestos a su disposición para el desempeño de sus funciones, en especial el puesto de trabajo.
- h) El diseño y ejecución en la Administración General e Institucional de la Comunidad de Madrid, de los proyectos de sistemas y tecnologías de la información y comunicación electrónica que dan soporte a su operativa, incluyendo la planificación, diseño, gestión y operación de las tecnologías y sistemas que garanticen el funcionamiento de una Administración digital.
- i) La definición, diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento, gestión y evolución del modelo de gobernanza tecnológica que proporcione el catálogo de servicios y métricas



asociadas, con seguimiento estandarizado de acuerdos de nivel de servicio, así como un cuadro de mandos del gasto en materia de tecnologías y comunicaciones.

j) Elaboración y aprobación de las políticas de seguridad de los sistemas de información y comunicación electrónicas de titularidad de la Agencia y la gestión de los recursos comunes para la prevención, detección y respuesta a los incidentes y amenazas de ciberseguridad en el ámbito de sus funciones.

k) El ejercicio de las funciones propias de encargado de tratamiento de los datos de carácter personal para la Administración General e Institucional de la Comunidad de Madrid, en el ámbito subjetivo de actuación.

l) El desarrollo de programas de capacitación y certificación en competencias digitales dirigidos a los empleados de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Madrid.

m) Asesoramiento y asistencia técnica en tecnologías de la información y comunicación electrónica.

n) La transferencia tecnológica y cooperación en materia de tecnologías de la información y la comunicación con las Administraciones locales de la Comunidad de Madrid u otras Administraciones Públicas adscritas.

ñ) El impulso de la reutilización de medios, sistemas y aplicaciones propiedad de la administración con fines de interés social.

o) La elaboración y aprobación de las resoluciones e instrucciones para el adecuado desarrollo de sus competencias.

p) La gestión y explotación de nombres de dominios de internet de la Comunidad de Madrid, con arreglo a los principios de calidad, eficacia, fiabilidad y accesibilidad y conforme al interés general, constituyéndose la Agencia en autoridad de asignación, registro y resolución de disputas, respecto del dominio del primer nivel ".madrid".

q) La tramitación, gestión y concesión de ayudas y subvenciones en el ámbito de sus funciones, incluidas las ayudas al estudio para prácticas universitarias en la Agencia.

r) Las que le atribuyan expresamente las leyes de la Comunidad de Madrid y los reglamentos dictados de conformidad con las previsiones específicas de la ley, así como



cualquier otra actividad, competencia o función que específicamente se le atribuya en relación con sus fines.

Cuatro. Régimen jurídico general.

4. Cuando la Agencia actúe en el ejercicio de potestades administrativas serán de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, será de aplicación la Ley 10/2019, de 10 de abril, de transparencia y participación de la Comunidad de Madrid.

6. El régimen de contratación de la Agencia será el establecido para las administraciones públicas en la legislación de contratos del sector público.

Seis. Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración de la Agencia estará constituido por el Consejero al que está adscrita la Agencia, en calidad de Presidente, el titular de la Viceconsejería con competencias en la materia de la Consejería de adscripción con competencias en la materia, que será el Vicepresidente, y los siguientes vocales:

- a) El Consejero-Delegado de la Agencia.
- b) Los Secretarios Generales Técnicos de las distintas Consejerías.
- c) Los Directores Generales competentes en materia de presupuestos, patrimonio, recursos humanos, función pública, calidad de los servicios, política digital y sistemas de información y equipamientos sanitarios.
- d) Podrán designarse vocales a propuesta del Presidente del Consejo, entre personas o titulares de cargos por razón de su carácter representativo o técnico. Su nombramiento y cese corresponderá al Consejo de Gobierno mediante Acuerdo.

Quince. Encargado de tratamiento.

1. Cuando la Agencia, en el ejercicio de sus fines y funciones, trate datos personales cuyo responsable del tratamiento esté comprendido en el ámbito de su responsabilidad subjetiva, se considerará que actúa como encargado del tratamiento, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 del artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de



diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados serán los que se especifiquen en el correspondiente registro de actividades de tratamiento. Las obligaciones y derechos del responsable serán las dispuestas en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

Lo expresado en el párrafo anterior no será aplicable cuando la Agencia sea corresponsable del tratamiento, en los términos del artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

2. Se autoriza, con carácter general, a la Agencia a recurrir a otros encargados del tratamiento, de conformidad con los apartados 2 y 4 del artículo 28 del Reglamento general de protección de datos. La Agencia mantendrá permanentemente a disposición de los responsables de tratamiento una relación actualizada de los encargados de tratamiento a los que, en su caso, haya recurrido, con la información relevante en relación con el objeto del encargo.

3. La Agencia, en su condición de encargado del tratamiento, actuará de conformidad con los siguientes términos y condiciones:

a) Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.

b) Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria derivada de su condición de empleado público. Garantizará el mismo deber de confidencialidad en caso de que el tratamiento se realice por otros encargados a los que, en su caso, recurra.



c) Tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del Reglamento general de protección de datos.

d) Recurrirá únicamente a otros encargados de tratamiento que ofrezcan las garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del citado Reglamento, y acrediten el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad o hayan adoptado medidas que puedan considerarse equivalentes.

e) Asistirá al responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de las personas interesadas.

f) Ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 del citado Reglamento, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado.

g) Seguirá las instrucciones del responsable en lo relativo a la supresión o conservación de los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

h) Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones como encargado, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.

i) Informará inmediatamente al responsable si, en su opinión, una instrucción infringe el citado Reglamento u otras disposiciones en materia de protección de datos y seguridad.

4. La Agencia facilitará asesoramiento técnico especializado a los responsables de tratamiento, como apoyo al cumplimiento de sus obligaciones en relación con la protección de datos desde el diseño y por defecto establecidas en el artículo 25 del Reglamento general de protección de datos, sin perjuicio de las funciones del Delegado de protección de datos que corresponda al responsable del tratamiento.

